

0005

AUTOS: “G. M. E. D - PEDIDO DE EXTRADICION – CASACION PENAL” - FICHA 2 – 8015/2019.

Suprema Corte de Justicia:

1) A fs. 167-171 se solicita la Casación del fallo de segundo grado obrante a fs. 152 -154 vto., sosteniéndose en lo medular que se han transgredido los arts. 10 y 11 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del MERCOSUR (aprobado por Ley N° 17.499, de fecha 27 de Mayo de 2002), a la vez que señala que ha de prevalecer el Acuerdo celebrado entre Uruguay y Brasil en el año 1916 (ratificado en el año 1919 , ley 5.643), que el Tribunal actuante ha desaplicado principios propios del Derecho Internacional, y que a su vez el Fallo recurrido no ha tenido en consideración que la extradición solicitada recae sobre una persona jurídicamente inimputable.

2) En cuanto a los agravios expresados por el recurrente, los mismos se examinarán en el orden en que han sido expuestos en el numeral que antecede

Así, respecto de lo primero, esto es, la alegada transgresión de los arts. 10 y 11 del Acuerdo sobre Extradición (ley 17.499), la impugnante expresa en lo medular que “...a pesar que el art.10 del Tratado sólo hace referencia a la minoría de edad,se debe llenar ese vacío con la legislación patria genérica, y allí la inimputabilidad psiquiátrica toma vigor y por ello la sentencia debe ser casada por ende revocada la extradición”. (fs.168 vto.)

Agrega que “...la posibilidad facultativa de denegar la extradición que (...) otorga el Tratado del MERCOSUR” debe entenderse inclusiva de una causal como la opuesta en autos, esto es, la inimputabilidad.

3) Y bien: sabido es que en el proceso de Extradición (en aquellos países en los que, como el Uruguay, no adoptan los lineamientos del sistema anglo americano) **no corresponde ingresar al tratamiento de cuestiones de fondo**, sino que el órgano jurisdiccional debe limitarse a controlar la regularidad formal del pedido y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los tratados que le fueren aplicable.

Por consiguiente, el Juez no ha de ingresar al análisis de la prueba de cargo y en base a su procedencia y razonabilidad acceder o denegar la extradición, sino que ha de mantenerse al margen de aquello que es competencia del Juez del mérito en la causa que se le sigue al extraditable en el Estado requirente.

En el sublite, es dable advertir que extremos tales como la comprobación de la salud mental del requerido y por ende su capacidad de comprender la ilicitud de los hechos imputados en su país de origen no conforman una cuestión meramente ritual ni procedimental, sino que su constatación ha de ser precedida de un proceso con todas las garantías cuyo Fallo, en lo Dispositivo, concluya -luego de examinados los extremos periciales correspondientes-la verificación de un inequívoco estado de interdicción. En consecuencia, en el ordenamiento al que se afilia el sistema positivo patrio, el Juez requerido no puede sustituir la labor de la jurisdicción originalmente

competente, y alegar la inimputabilidad del encausado como fundamento denegatorio de la extradición.

Adviértase, además, que el deterioro del estado mental de una persona suele originarse en multiplicidad de factores, en su mayoría clínicamente variables, que únicamente pueden ser diagnosticados y evaluados por los facultativos especializados. Por tal razón, no existe una inmutabilidad (ni en el caso: una habilitación legal nacional o supranacional) que habilite a un Magistrado a equiparar este extremo al de una cuestión meramente formal. La potestad a la que hace referencia la recurrente, incluida en el art.11 del Tratado de marras tampoco habilita tal facultad, sino que refiere exclusivamente a la hipótesis allí enunciada, esto es, la nacionalidad de la persona reclamada, estableciéndose que dicho extremo no podrá ser invocado para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario, habilitando (a modo de excepción a la regla) a los “Estados Parte” que no contemplen una disposición de igual naturaleza a denegar la extradición de sus connacionales. Como puede advertirse, esta disposición en nada guarda relación con la quaestio ventilada en autos.

4) Por demás, las excepciones establecidas en el ejusdem han de ser interpretadas como tal, esto es, de forma restrictiva y sin analogías legalmente improcedentes. Por consecuencia, si el art.10 del Tratado en estudio refiere a la minoría de edad como extremo habilitante para denegar la extradición (*“No se concederá la extradición cuando la persona reclamada*

hubiere sido menor de dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se le solicita”), dicha hipótesis no puede hacerse extensible a la inimputabilidad actual que invoca el recurrente, extremo este que debe ser examinado ante sus jueces naturales.

5) En cuanto al agravio referido a la supuesta prevalencia del Acuerdo bilateral celebrado entre Uruguay y Brasil en el año 1916 (ratificado en el año 1919) , por sobre el Acuerdo de Extradición suscripto entre los Estados miembros del MERCOSUR, tampoco le asiste razón a la impugnante.

En lo sustancial, el primitivo convenio -celebrado como viene de señalarse en el año 1916- estableció fuertes limitaciones a la procedencia de la extradición; en dicho texto se estableció que los ciudadanos naturales de Brasil y los nacionalizados brasileños no pueden ser extraditados; a ello le siguió el convenio suscrito en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998, para culminar con el Acuerdo multilateral ratificado por nuestro País en el año 2002 por ley 17.499, el cual se aparta de la rigidez originariamente establecida más de ocho décadas atrás, apartándose además del principio de primacía de la nacionalidad del requerido (salvo disposición constitucional en contrario), disponiéndose a texto expreso que *“la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición”*. Huelga señalar que la Constitución Nacional nada ha previsto al respecto, por lo cual la excepción antedicha no viene de aplicación en nuestro Sistema.

Atendiendo entonces a lo precedentemente señalado, notoriamente la incompatibilidad ente ambos regímenes examinados ***torna prevalente la norma supra-nacional posterior***, no siendo posible alegar la vigencia temporal de una disposición estampada en el Acuerdo bilateral de 1916 que se contradice con lo suscripto inter-partes varias décadas después, y que se halla vigente en el Uruguay luego de la ratificación otorgada por la pluricitada ley 17.499.

6) A mayor abundamiento, la posición aquí desglosada forma parte de cuanto se ha establecido en el art.59 de la Convención de Viena, el cual regula la hipótesis de contradicción entre normas convencionales anteriores y posteriores, sentándose el inequívoco principio de que ***estas últimas han de prevalecer*** en su aplicación.

Por los fundamentos expuestos, esta Fiscalía estima que los agravios no son de recibo, correspondiendo el **rechazo** del recurso en vista.

MA/ma/sa

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación